concepto unitario de tercero hipotecario)», *RCDI*, núm. 508, mayo-junio 1975, pp. 591-626, y núm. 529, noviembre-diciembre 1978, pp. 1105-1148].

7. La AP estima que a pesar de todo ha de estimarse parcialmente el recurso de apelación, porque la sentencia se pronuncia sobre la restitución y abono de frutos e intereses que no son consecuencia de las declaraciones que se hacen, sin perjuicio de que las partes puedan posteriormente actuar al respecto del modo que estimen pertinente. Las costas de la instancia se regirán por los arts. 873 y 710 LEC.

Antonio MARÍN LÓPEZ

3. Adopción

2000-55-Pr

ADOPCIÓN INTERNACIONAL.—Adopción simple constituida en Guatemala.—Renuncia de los adoptantes a su derecho a revocar la adopción.—Inscripción en el Registro Civil: no.

Preceptos aplicados: arts. 9, 11, 12, 20, 108, 154, 162, 176, 178 y 180 Cc; 1, 15, 16, 23, 38 y 46 LRC; 66, 68, 85, 145, 152 y 154 RRC.

Se ha intentado por estas actuaciones inscribir una adopción, constituida en Guatemala por un matrimonio de españoles a favor de una menor guatemalteca, alegando los padres adoptivos que han renunciado por comparecencia ante el Encargado del Registro Civil a su derecho a la revocación de la adopción (cf. art. 9.5.º, párrafo final, Cc, en su redacción por la Ley 18/1999, de 18 de mayo), con lo que en su opinión ya no hay obstáculos para que esa adopción sea reconocida en España.

Ahora bien, aunque esa renuncia levante uno de los obstáculos que impiden el reconocimiento en España de la adopción guatemalteca, no se produce aún la correspondencia de efectos que el art. 9.5.º Cc exige para que una adopción extranjera pueda ser reconocida como tal en el ordenamiento español. Si se tiene en cuenta que la adopción única que regula el Código Civil español supone la integración a todos los efectos del adoptado en la familia del adoptante o adoptantes y, como regla, la ruptura total de vínculos con la familia anterior (cfr. arts. 108, 176 y 178 CC), mientras que la adopción guatemalteca sólo produce efectos entre el adoptante y adoptado; el primero no es siquiera heredero legal del segundo; el adoptado y su familia natural conservan sus derechos de sucesión recíproca, y el adoptado menor de edad al morir el adoptante vuelve al poder de sus padres naturales, hay que concluir que la adopción examinada en este caso no guarda puntos de contacto con la adopción del Código Civil español y no puede considerarse incluida en la lista de actos inscribibles que contiene el art. 1 LRC, so pena de producir equívocos en cuanto a la eficacia de la adopción inscrita.

Resolución (2.ª) DGRN de 5 de abril de 2000.

F.: *BIMJ*, núm. 1870, 1999, pp. 2018-2021.

Nota: 1. La Resolución objeto de comentario se refiere al reconocimiento de una adopción constituida en Guatemala. Este país no es parte del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional, ni tiene suscrito con nuestro país algún otro Convenio que pudiera resultar aplicable. El reconocimiento quedaba sujeto por tanto al cumplimiento de los requisitos exigidos en el sistema autónomo o común, básicamente a lo dispuesto en los apartados IV, V y VI del art. 9.5 del Cc (C. ESPLUGUES MOTA, «El nuevo régimen jurídico de la adopción internacional», *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1997, pp. 58 y ss.).

2. En este caso, al igual que ha ocurrido ya en otras numerosas Resoluciones, el problema se planteaba en relación con el mencionado apartado V, que establece en su primera frase que «no será reconocida en España como adopción la constituida en el extranjero por adoptante español, si los efectos de aquélla no se corresponden con los previstos por la legislación española» (sobre la práctica de la DGRN en este punto *vid.* M. BALLESTEROS DE LOS RÍOS, «Reconocimiento de efectos en España a las adopciones constituidas ante la competente autoridad extranjera», *Aranzadi Civil*, junio 1999, pp. 18 y ss.).

Debemos tener presente que para que exista la requerida correspondencia de efectos ha de tratarse de una adopción plena, equiparable a la filiación por naturaleza, que produzca con carácter general la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptando y la familia anterior, y que sea irrevocable (P. DE MIGUEL ASENSIO, *Eficacia de las resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria*, Eurolex, Madrid, 1997, p. 210). Características que no siempre se dan en un ámbito marcado por las divergencias legislativas y culturales, y que, como refleja la Resolución en sus hechos y fundamentos de derecho, no se daban en la adopción constituida en Guatemala (para un estudio de derecho comparado sobre los efectos que produce la adopción en los distintos países, *vid.* J. H. A. VAN LOON, «International Cooperation and Protection of Children with regard to Intercountry Adoption», *R. des C.*, 1993-VII, pp. 382 y ss.).

3. No es la primera vez que la DGRN se pronuncia de esta manera en relación con adopciones constituidas en Guatemala; cabe citar las Resoluciones de 13 de noviembre de 1998 y de 11 de mayo de 1999 (*BIMJ*, núm. 1851-52, pp. 2550 y ss.; y *BIMJ*, núm. 1857, pp. 3476 y ss.). La peculiaridad que presenta la Resolución objeto de comentario es que los adoptantes, tras aceptar que se les denegara el reconocimiento en su comparecencia de 13 de mayo de 1997, volvieron a plantear la cuestión a raíz de la aprobación de la Ley 18/1999, de 18 de mayo, de modificación del artículo 9, apartado 5, Cc.

Esta Ley incorporó un nuevo párrafo al art. 9.5.º Cc, el VI, que dice lo siguiente: «La atribución por la ley extranjera de un derecho de revocación de la adopción no impedirá el reconocimiento de ésta si se renuncia a tal derecho en documento público o por comparecencia ante el encargado del Registro civil.» Y además la Ley, al introducirlo, señaló en su disposición transitoria única que sería también de aplicación a las adopciones constituidas con anterioridad a su entrada en vigor.

Los adoptantes, según se desprende de los hechos, hicieron uso precisamente de esta posibilidad. Volvieron a comparecer el día 4 de agosto de 1999, en el Registro Civil de A., y renunciaron al derecho de revocación de la adopción que les otorgaba la ley gua-

temalteca, solicitando a continuación que se practicara la oportuna inscripción. Pero se les volvió a denegar por el Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central, y posteriormente en la Resolución objeto de análisis, con el mismo argumento, se había salvado el tema de la revocabilidad, pero seguía faltando la requerida correspondencia de efectos. Anteriormente reflejábamos cómo se concibe la adopción en España. En la Resolución se recoge de modo bastante detallado las normas guatemaltecas en materia de adopción, y de su lectura se desprende que la apreciación de la DGRN resultaba acertada.

4. Durante la tramitación de la Ley 18/1999, de 18 de mayo, se presentaron enmiendas tendentes a que tuviera un ámbito más amplio de aplicación. R. Espinosa Calabuig refleja cómo el grupo parlamentario catalán (CIU) denunció el ámbito excesivamente limitado de la proposición de ley, señalando que no resolvía los problemas de las adopciones realizadas en ciertos países, entre los que citaba precisamente a Guatemala; y también que el grupo parlamentario socialista presentó una enmienda con un sentido similar (*vid.* «Una nueva reforma en materia de adopción internacional en España», *RGD*, abril 2000, pp. 4354).

Pero la cuestión es que no se hizo. La Ley 18/1999, 18 de mayo, señala en su Exposición de Motivos que si la única diferencia entre la adopción española y extranjera estriba en la posibilidad del adoptante de revocar la adopción durante la minoría de edad del hijo adoptivo, parece justo abrir algún camino para que, sin necesidad de que la adopción se constituya *ex novo* en España por vía judicial, pueda reconocerse eficacia en nuestro ordenamiento a tales adopciones extranjeras. Esta limitación ha sido criticada por la doctrina, que opina que se podría haber aprovechado esta última reforma para resolver el discutido problema del reconocimiento de las adopciones simples (N. BOUZA VIDAL, «Artículos 124 a 126», *Comentaris al Codi de Família a la Llei d'Unions estables de parella i a la Llei de situacions convivencials d'ajuda mútua*, J. Egea i Fernandez, J. Ferrer i Riba [dir.], Tecnos, Madrid, 2000, pp. 585-586; A. RODRÍGUEZ BENOT, «Ley 18/1999, de 18 de mayo, de modificación del artículo 9, apartado 5.º, del Código Civil en materia de adopción internacional», *REDI*, 1999, 2, p. 818).

En definitiva, la DGRN sigue en esta Resolución fiel a sus criterios, respaldada ahora por la última reforma del complejo art. 9.5.º Cc.

Beatriz CAMPUZANO DÍAZ

4. *Documentos extranjeros*

2000-56-Pr

DOCUMENTO PÚBLICO EXTRANJERO.—Aptitud para acceder a un Registro público español.—Poder otorgado en Alemania por un vendedor titular registral de una finca sita en España.—Poder a favor de la esposa para la venta del inmueble.—Equivalencia entre los documentos públicos correspondientes al modelo de Notariado latino.—Aplicación judicial del Derecho extranjero.—Conocimiento suficiente de la Registradora.

Preceptos aplicados: arts. 10.1.º, 12.1.º, 1.216 y 1.280 Cc; arts. 1, 3, 4 y 38 LH; arts. 33, 34 y 36 RH.